

Ante un escenario de polarización extrema

Bolivia: la democracia más allá de las urnas

Pamela San Martín*



MARCHA NOTICIAS

En medio de una profunda crisis política, social e institucional, el 18 de octubre pasado los bolivianos mostraron la fuerza de las vías democráticas para superar diferencias y profundas polarizaciones. Pero su historia reciente también evidencia que, para preservar la paz, los principios democráticos no se limitan a las decisiones en las urnas, sino que deben trascender al ejercicio del gobierno y al fortalecimiento de las instituciones

iremos unos años atrás. Más allá de cualquier discusión o análisis sobre los claro-oscuros de los casi catorce años del gobierno del MAS encabezado por Evo Morales, o en torno a las brechas entre los discursos y las prácticas institucionales que estuvieron presentes, o frente a las denuncias por violaciones a derechos humanos en ese período, un punto inegable es que se trató de un gobierno electo democráticamente, apoyado por una amplia mayoría.

Sin embargo, fueron precisamente las prácticas antidemocráticas las que dieron origen a profundas divisiones y la crisis más reciente del país: cuando no obstante en el referendo constitucional de 2016 se decidió no permitir al presidente Morales postularse para un cuarto mandato, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el entonces mandatario dieron la espalda a la decisión popular; el primero, eliminando los límites a la reelección presidencial, y el segundo, postulándose para las elecciones generales de 2019.

Estas decisiones profundizaron la polarización. Aunado a ellas, el mal manejo del proceso electoral, en el que la percepción popular fue de profundas irregularidades o incluso de “fraude”¹, concluyó en fuertes protestas que culminaron en la dimisión de Morales y su salida del país. Su llamado previo a convocar nuevas elecciones fue insuficiente para paliar la crisis desatada. Así, ante la vacancia del exmandatario, su exvicepresidente, la expresidenta y el primer vicepresidente del Senado, y frente a alegaciones de un “golpe de Estado”, Jeanine Áñez asumió la presidencia interina.

Con esto se dio inicio a un nuevo capítulo de la historia boliviana, que se distinguió por graves hechos de represión y revanchismo político –en los que incluso se inició un proceso penal contra el exmandatario por “terrorismo”²–, así como una disputa por el poder marcada por discursos que traían implícitas nuevas prácticas antidemocráticas que día a día fueron exacerbando los antagonismos.

Si bien en un primer momento, a fin de superar la crisis política e institucional, todas las

fuerzas políticas –incluido el gobierno transitorio– buscaron acuerdos para dar un cause democrático a la problemática –a través de una nueva elección a celebrarse el 3 de mayo de 2020 inicialmente, organizada por una nueva autoridad electoral que brindara confianza a todos–, los consensos fueron endebles y los distintos actores fueron entorpeciendo los compromisos que habían asumido en un inicio.

La respuesta a la crisis social, en cambio, tuvo un enfoque distinto. En lugar de recurrir al diálogo, esta fue enfrentada con la fuerza, a través de acciones de la policía y de las Fuerzas Armadas para el control del orden público. A pesar de los señalamientos de un uso desmedido y desproporcionado de la fuerza, desde el gobierno se publicó un decreto³ que parecía avalar los excesos, al eximir de responsabilidad penal al personal que participara en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad del orden público⁴.

En cuanto al desarrollo del proceso electoral, no obstante la legitimidad de origen con que contaban los nuevos vocales –al haber sido designados por consenso de las distintas fuerzas– su trabajo se enmarcó en señalamientos y cuestionamientos permanentes por parte de todos los actores políticos, prácticas que entorpecían el desarrollo de la elección, así como en la incertidumbre que se adueñó del horizonte comicial, primero por la pandemia, luego por el uso electoral de la misma.

En este contexto, un primer punto de quiebre se dio cuando la presidenta Añez tomó la decisión de postularse en las elecciones, a pesar de que, al asumir el interinato, aseguró que su objetivo principal era llamar a nuevas elecciones y no participar en ellas. Meses después terminó renunciando, cuando sus niveles de acepción habían menguado, y expresó que su decisión de postularse fue para evitar que el MAS regresara al poder.

El aplazamiento de las elecciones a causa de la pandemia también dio lugar a distintas prácticas que derivaron en cinco meses de incertidumbre respecto a la fecha de la elección, con la ruptura de los acuerdos políticos y el uso electoral de la pandemia como la única constante.

Ante un escenario de polarización extrema, a diferencia de las ocasiones anteriores en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) buscó un acuerdo previo con las fuerzas políticas, esta vez optó por fijar directamente el 18 de octubre como la fecha definitiva de la elección, a fin de terminar con la incertidumbre.

Si bien esto dio fin a la larga discusión sobre la fecha de los comicios, los antagonismos y la polarización no cesaron. La campaña electoral venidera fue marcada por descalificaciones (tanto de los grupos afines al MAS contra el gobierno interino, como por los grupos opositores

al MAS, buscando la desaparición de esa fuerza política) y por discursos de odio que generaron un contexto de extrema desconfianza e incluso temor de que las elecciones pudieran derivar en violencia como el año anterior.

No obstante, contrario a las expectativas, la jornada electoral se celebró en un ambiente de paz y tranquilidad. El 88 % de los bolivianos acudieron a las urnas y nuevamente, por una amplia mayoría, otorgaron su respaldo al candidato postulado por el MAS, y a un proyecto que apunta al crecimiento económico y a la inclusión de los grupos indígenas, y da continuidad al proyecto iniciado por Evo Morales, ahora sin su figura.

Al momento de escribir este artículo, estamos a pocos días de que tome protesta Luis Arce como presidente de Bolivia. De lo expuesto, si bien los comicios del 18 de octubre fueron un paso indispensable para lograr encauzar las diferencias y la crisis política, social e institucional, ahí no termina la historia, es tan solo el punto de arranque.

Si algo tenemos que aprender de la historia reciente de Bolivia es que su sociedad tiene una clara vocación por las vías democráticas como el medio para solucionar sus conflictos, pero no entiende la democracia únicamente como la realización de elecciones, sino que requiere de una institucionalidad que encause su actuar precisamente por estas vías, y que respete la voluntad expresada en las urnas. La capacidad del presidente electo Arce para cumplir con esta aspiración será lo que marcará el rumbo que habrá de tomar Bolivia, y si tras una fiesta democrática, realmente se puede avanzar en un camino de paz y reconciliación.

*Analista político y electoral. Exconsejera electoral del INE de México
I @SnMartinPamela

NOTAS:

- 1 Pues a pesar de que los resultados preliminares proyectaban una segunda vuelta, su difusión fue interrumpida abruptamente y sin una razón técnica, y cuando finalmente se reanudó el conteo, los resultados cambiaron radicalmente, dando como ganador en primera vuelta al entonces presidente Morales.
- 2 Acusación que derivó de los hechos vinculados con su salida del poder en noviembre de 2019, y que fue calificada de “desproporcionada” por la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch.
- 3 Decreto Supremo No. 4078 de 2019.
- 4 Ver comunicado de prensa CIDH, del 19 de noviembre de 2019, visible en: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/296.asp>